



## **SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL**

**Proceso:** EJECUTIVO LABORAL ANEJO PROCESO ORDINARIO  
**Radicado:** 05001-31-05-006-2018-00276-02 (E2-22-254)  
**Accionante:** HERNANDO HURTADO QUINTERO  
**Accionada:** UGPP  
**Procedencia:** JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN  
**Asunto:** EXCEPCIONES DE MÉRITO

En Medellín, a los seis (06) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar decisión de segundo grado, dentro del proceso EJECUTIVO LABORAL ANEJO AL PROCESO ORDINARIO conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-003-2021-00470-01 (O2-22-404), instaurado por HERNANDO HURTADO QUINTERO en contra de la UGPP, con el objeto de decidir el recurso de apelación formulado por HERNANDO HURTADO QUINTERO y la UGPP, contra el auto mediante el cual se declaró infundadas las excepciones de pago, compensación y prescripción propuestas por la UGPP, proferido el 07 de julio de 2022 por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín.

### **1. ANTECEDENTES**

El señor HERNANDO HURTADO QUINTERO, actuando a través de apoderado judicial, promovió demanda ejecutiva en contra de la UGPP, en procura de obtener el pago de las siguientes obligaciones:

- a. Por el valor de las mesadas pensionales de jubilación convencional, causadas entre el 1 de julio de 2007 y el 11 de marzo de 2008.
- b. Por el valor de las diferencias resultantes entre la pensión de jubilación convencional y la pensión de vejez reconocida por COLPENSIONES E.I.C.E., causadas entre el 12 de marzo de 2008 y el 31 de diciembre de 2008(sic).

- c. Por el valor que arroje la indexación del retroactivo pensional, causado a partir de la fecha de causación de cada mesada pensional y diferencia resultante y hasta la fecha en que se verifique el pago efectivo.
- d. Por el valor de la liquidación de costas fijadas en el proceso ordinario primigenio y las que se originen dentro del trámite de ejecución.

Como fundamento de sus pedimentos, indicó que impulsó proceso ordinario laboral en contra del entonces Instituto de Seguros Sociales con miras a obtener el reconocimiento y pago indexado de la pensión convencional de jubilación, causada durante el lapso comprendido entre el 1° de julio de 2007 y el 11 de marzo de 2008, en cuantía igual al 75% del promedio de los ingresos percibidos durante el último año de servicios, pedimentos que fueron resueltos en primera instancia por el Juzgado Sexto Laboral de Descongestión de Medellín y en segundo grado, por la Sala Tercera de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de este distrito judicial, el 30 de agosto de 2013 y el 30 de noviembre de 2015, respectivamente.

En punto a las diferencias pensionales reclamadas, pone de presente que las mismas se originan por haber reconocido el Instituto de Seguros Sociales una pensión vejez a partir del 12 de marzo de 2008.

### 1.1. Trámite de primera instancia

La juzgadora de instancia en auto del 1° de marzo de 2019 (págs.442 a 443, doc.01, carp.019, resolvió *[n]egar mandamiento de pago solicitado por el señor Hernando Hurtado Quintero en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP*, decisión que fuera revocada por esta Corporación en proveído del 09 de octubre de 2020 (págs.465 a 484, doc.01, carp.01), disponiendo entre otras decisiones:

*PRIMERO: REVOCAR el proveído de fecha 1° de marzo de 2019, proferido por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión, para en su lugar, LIBRAR mandamiento ejecutivo de pago a favor del señor HERNANDO HURTADO QUINTERO y en contra de la UGPP por los siguientes conceptos:*

- A. *Por el valor de siete millones doscientos ochenta y dos mil quinientos dieciocho pesos (\$7,282,518) por concepto de la pensión de jubilación en cuantía del 75% del promedio devengado en el último año de servicios a partir del 1° de julio de 2007 y hasta el 11 de marzo de 2008.*

- B. Por el valor de cuarenta y ocho millones cincuenta mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos (\$48,050,485) por el valor de las diferencias pensionales existentes entre la pensión de vejez y la jubilación desde el 12 de marzo de 2008 hasta el 30 de septiembre de 2020.*
- C. Por el valor que se determine por concepto de indexación del retroactivo que se genere como consecuencia del reajuste pensional entre la fecha de causación de cada mesada y diferencia pensional, y hasta la fecha de su real y efectivo pago.*
- D. Por el valor de las costas procesales que se generen en el presente proceso ejecutivo.*

*SEGUNDO: NEGAR el mandamiento ejecutivo de pago por las agencias en derecho causadas en el proceso ordinario.*

Decisión que, dicho sea de paso, fue acatada por la juzgadora de primer grado en providencia del 30 de octubre de 2020 (doc.02, carp.01), en donde dispuso, *[c]úmplase lo resuelto por el superior en providencia anterior, continúese con el trámite del proceso notificando el auto mandamiento de pago a la entidad ejecutada, advirtiéndole que tiene cinco (5) días para pagar la obligación y diez (10) días para proponer excepciones, contados a partir del día siguiente de la notificación.*

Notificada la accionada UGPP el 10 de diciembre de 2020 (doc.04, carp.01), se opuso a la prosperidad de las pretensiones, formulando en su defensa las excepciones de mérito que rotuló como pago, compensación, inexistencia de la obligación, prescripción, inexistencia del título ejecutivo, imposibilidad de condena en costas e inembargabilidad de las cuentas de la UGPP (doc.05, carp.01); medios exceptivos que fueron puestos en conocimiento de la parte ejecutante, conforme lo prevé el artículo 443 del CGP (doc.14, carp.01), extremo de la litis que emitió el pronunciamiento que estimó del caso (doc.16, carp.01).

## **1.2. Decisión de Primera Instancia**

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 07 de julio de 2022 (docs.29 a 30, carp.01), mediante auto emitido por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, en la que declaró no probadas las excepciones de mérito de pago, compensación y prescripción, determinando continuar *con la ejecución para el pago forzado de la obligación en los términos indicados en el auto mandamiento de pago.*

Para sustentar su decisión, la cognoscente de primer grado luego de invocar el artículo 442 del CGP, sostuvo que las excepciones que proceden en estos trámites corresponden a las de prescripción, compensación y pago. Así, recordó que entre la fecha en que se hizo exigible las obligaciones contenidas en el título ejecutivo traído en recaudo y el momento en que se presentó la reclamación administrativa e incluso, cuando se presentó la demanda ejecutiva, no había transcurrido el término de 3 años de que trata el artículo 151 del CPTSS, no operando así la figura jurídica de la prescripción. Asimismo, resaltó que la parte accionada no allegó medio de prueba alguno, más allá de su propio dicho, que diera cuenta del pago de suma dineraria a favor del ejecutante, así tampoco, de la obligación que fuera deudor el promotor de la litis, para entender, de consiguiente, que se estructuró el pago de la obligación o bien la compensación alegada (minuto 03:51 a 24:40, link audiencia, doc.29, carp.01).

### **1.3. Recurso de Apelación**

El procurador judicial del señor HERNANDO HURTADO QUINTERO inconforme con la decisión interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, en procura de que se revoque parcialmente la decisión adoptada en la primera instancia, para en su lugar, se disponga que el valor de las diferencias pensionales que se causaron a partir del 12 de marzo de 2008, deben ser liquidadas hasta la fecha de fallecimiento del mencionado señor HURTADO QUINTERO, y no limitarlas al 30 de septiembre de 2020, como quedó consignado en el mandamiento de pago (minuto 24:41 a 29:57, doc.29, carp.01).

A su turno, la apoderada judicial de la ejecutada UGPP presentó recurso de alzada ante el *a quo*, fundando el disenso particularmente en no contar i. con certificado de tiempos laborados por el señor HERNANDO HURTADO a favor del Instituto de Seguros Sociales y demás empleadores, y; ii. no existir beneficiario del pago de las obligaciones objeto de cobro en la actuación, por causa del deceso del ejecutante (minuto 30:04 a 33:45, doc.29, carp.01).

### **1.4. Trámite de Segunda Instancia**

Los recursos de apelación se admitieron el 25 de julio de 2022 (doc.04, carp.02), y mediante proveído del día 1° de agosto del mismo año (doc.05, carp.02) se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1o del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran los alegatos de conclusión por escrito que estimaren pertinentes.

El apoderado judicial principal del señor HERNANDO HURTADO QUINTERO (doc.06, carp.02), presentó alegaciones reiterando las razones de hecho y de derecho esbozadas con

la sustentación del recurso de alzada, insistiendo en la imposibilidad de limitar el pago de las diferencias pensionales resultantes a una fecha anterior a la muerte de su prohijado, agregando que *[j]urídicamente resulta incontrovertible que las mesadas por la diferencia entre la pensión de vejez y la pensión de jubilación que le corresponden al señor HERNANDO HURTADO QUINTERO son de causación periódica y de tracto sucesivo; por lo que no existe ninguna razón para haber limitado el reajuste de dichas mesadas hasta el días 30 de septiembre de 2020 como de manera desacertada lo hizo la A-quo(sic), precisando que el actor mantuvo intactos sus derechos pensionales hasta el día 29 de julio de 2021 cuando falleció (mediante memorial del día 26 de mayo de 2022 aporte registro civil de defunción de mi mandante), puntualizando que en la decisión fustigada se incurre en un yerro mayúsculo cuando concluye que de conformidad con el literal B del auto que libró mandamiento de pago señalado por el Ad-quem(sic), no es posible ordenar dichas diferencias pensionales sino hasta el 30 de septiembre de 2020, y por el contrario en nuestro sentir procede dicho reconocimiento hasta el día del fallecimiento del actor en tanto no existe ningún fundamento jurídico para limitar en el tiempo el reconocimiento de un reajuste pensional, máxime cuando a su juicio, la fecha final tomada por el Colegiado para calcular el retroactivo pensional por concepto de las diferencias echadas de menos, lo fue de manera provisional (doc.06, carp.02).*

La UGPP afirmó que, a partir del fallecimiento del pretensor se configuró una falta de legitimación en la causa por activa, *pues se pretende el pago de unos valores en cumplimiento de un fallo sin existir beneficiario(a) de la sustitución pensional, ni tampoco ha sido reconocido como heredero del causante persona alguna, situación ésta que no le permite al apoderado estar investido de legitimidad para pretender el reconocimiento de dichos valores.* Prosigue puntualizando que, a fin de dar cumplimiento al título ejecutivo objeto de cobro coactivo, se hace necesario que las entidades a favor de las cuales el causante prestó sus servicios personales, *expidan los certificados de información laboral y factores salariales por los períodos laborados en las entidades mencionadas a través de la herramienta CETIL (Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados), acudiendo a lo señalado en el Decreto 726 de 2018 (doc.07, carp.02).*

## **2. ANÁLISIS DE LA SALA**

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por el señor HERNANDO HURTADO QUINTERO y la UGPP, advirtiéndose que, de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio del auto impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada.

## **2.1. Problema jurídico**

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala, se contrae a determinar si, dada la definición de los medios exceptivos propuestos, debe continuarse la ejecución dentro del marco señalado en el auto que libró el mandamiento de pago, sin incluir las diferencias pensionales que llegaren a causarse con posterioridad al 20 de septiembre de 2020. De igual manera, se resolverá si el deceso del señor HERNANDO HURTADO QUINTERO, así como la ausencia de los certificados de tiempo de servicios y factores salariales del mismo, cuentan con la entidad suficiente para entender probadas las excepciones de mérito impulsadas por la ejecutada.

## **2.2. Sentido del Fallo**

La Sala confirmará la decisión impugnada, al encontrar que, conforme a la regulación contenida en los artículos 442 y 443 del CGP, resulta jurídicamente improcedente en la etapa de decisión de excepciones de mérito, modificar o corregir el petitum de la demanda ejecutiva, para incluir otras obligaciones en el mandamiento de pago, debiendo las partes en contienda sujetarse al tenor del marco decisorio fijado en la orden ejecutiva.

## **2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado**

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la controversia planteada, se advierte que no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos: que el Juzgado Sexto Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín, en sentencia del 30 de agosto de 2013, resolvió condenar al Instituto de Seguros Sociales en liquidación a reconocer y pagar a favor del señor HERNANDO HURTADO QUINTERO la pensión de jubilación convencional desde el 1 de septiembre de 2013 en cuantía del 75% del promedio devengado en el último año de servicios, *junto con la diferencia pensional existentes entre la pensión de vejez y la jubilación desde el 12 de marzo de 2008 y hasta el 30 de agosto de 2013 (sic)* (págs.334 a 345, doc.01, carp.01); que la Sala Tercera de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, adicionó la decisión proferida por el Juzgado Sexto Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín, *en el sentido de ordenar la indexación del retroactivo que se genere como consecuencia del reajuste pensional de acuerdo con el IPC* (págs.358 a 363, doc.01, carp.01), y que la Sala Segunda del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 20 de mayo de 2016 adicionó con el numeral quinto, la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2015 por la Sala Tercera de Descongestión de la misma Corporación, y así **CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN -hoy liquidado mediante Decreto 553 de 2015, razón por la cual, por disposición legal, la presente sentencia habrá de ser atendida por el PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DEL SEGURO SOCIAL EN LIQUIDACION-**. *A reconocer y pagar al señor HERNANDO HURTADO QUINTERO, pensión convencional de jubilación, debidamente indexada, a partir del 1° de julio de 2007 y hasta el 11 de marzo de 2008, en cuantía equivalente al "...75% del promedio de lo percibido en el último año de servicios por concepto de todos los factores de remuneración que constituyen salario..."* (págs.369 a 375, doc.01, carp.01).

De igual forma, no se discutió que el Instituto de Seguros Sociales en Resolución No. 009942 del 23 de abril de 2009, reconoció al señor HERNANDO HURTADO QUINTERO, una pensión de vejez partir del 12 de marzo de 2008, en cuantía inicial de \$497.204,00 y conforme con lo estipulado en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (págs.14 a 18, doc.01, carp.01).

Siendo ello así, memora la Sala que el promotor de la Litis ubica como punto nodal del disenso, la limitación, al 30 de septiembre de 2020, de la orden de pago de las diferencias pensionales que resulten entre la pensión de jubilación convencional reconocida por la autoridad judicial y aquella concedida por el Instituto de Seguros Sociales, pretermitiendo que dicha fecha se tomó de manera provisional para la cuantificación en concreto de la suma dineraria adeudada, y siendo ello así, comprender la orden de pago de forma restrictiva, como lo hizo el juzgador de

primer grado, termina por excluir del cálculo de las cuotas vencidas, las diferencias pensionales que se causaron de manera ulterior a la orden de pago librado por esta Corporación.

Puestas, así las cosas, lo primero que relieves la Sala para resolver el escollo que plantea el asunto litigioso, es que, el objeto, o, si se quiere, el fin último, de los procesos ejecutivos no es otro que la completa satisfacción coactiva de las obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles, que consten *en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme*<sup>1</sup>; por lo que cristalino se muestra que las actuaciones judiciales de esta índole solo termina por el cumplimiento o pago total de la obligación respectiva.

De suerte que, al momento que el juzgador encuentre cumplidos los presupuestos arriba reseñados, libraré mandamiento de pago con la orden al ejecutado para que cumpla dentro del término legal o judicialmente establecido la obligación a su cargo que se reputa insoluble; decisión que, conforme lo ha aquilatado la Corte Constitucional en sentencia SU-041 de 2018, *no solo tiene la característica de una providencia mediante la cual se admite la demanda porque reúne los requisitos para tal fin y da inicio al proceso respectivo, tal como ocurre en la mayoría de procedimientos y especialmente en el de naturaleza cognitiva o declarativa, sino que además, establece la competencia del juez que lo profiere para analizar los documentos que contienen la obligación cuya ejecución se pretende, pues debe encontrar acreditada la existencia de un título ejecutivo, porque satisfacen las condiciones formales y sustanciales establecidas en la ley y puede generar su cobro al ejecutado*. -Subrayado intencional de la Sala-

En línea con lo anterior, es el mandamiento de pago la decisión que cuantifica el monto de la obligación adeudada de forma inicial, o bien provisional, en tanto en cuanto, lo allí dispensado es susceptible de ser modificado bien por solicitud de la parte ejecutante<sup>2</sup>, bien por la prosperidad de uno cualquiera de los medios exceptivos que sean formulados por la convalidada a juicio<sup>3</sup>; señalando en este último caso el artículo 446 del CGP que, *[e]jecutoriado el auto que ordene seguir adelante la ejecución, o notificada la sentencia que resuelva sobre las excepciones siempre que no sea totalmente favorable al ejecutado **cualquiera de las partes podrá presentar la liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su presentación, y si fuere el caso de la conversión a moneda nacional de aquel y de estos, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento***

<sup>1</sup> Artículo 100 del CPTSS, y artículo 422 del CGP

<sup>2</sup> Artículos 93, 285, 286 y 287 del CGP. Corrección, aclaración y reforma a la demanda. Adición, corrección y aclaración de providencias. Artículo 28 del CPTSS. Reforma de la demanda.

<sup>3</sup> Artículos 442 y 443 del CGP.

**ejecutivo**, adjuntando los documentos que la sustenten, si fueren necesarios. -Negritas y subrayado intencional de la Sala-

En este contexto, si bien es la etapa de la liquidación del crédito, donde se concreta el valor realmente adeudado por la parte ejecutada<sup>4</sup>, no se pasa por alto que este ejercicio aritmético, en tratándose de ejecución por sumas de dinero<sup>5</sup>, debe someterse al marco de lo dispuesto en el mandamiento de pago; de ahí que, resulte tan trascendental como necesario, que las obligaciones allí consignadas, guarden consonancia por un lado con las aspiraciones del pretensor, y de otro, respondan al saldo efectivamente adeudado por la convocada; lo que finalmente acaece con la audiencia especial de resolución de excepciones de mérito y la posterior liquidación del crédito.

Lo anterior para significar que, sin perjuicio de los poderes oficiosos y de control de legalidad que tiene a su disposición el juez que surte la ejecución y que se consagran, entre otros, en los artículos 48 del CPTSS y 42 y 132 del CGP, los profesionales del derecho que apoderan a las partes integrantes de la litis, deben permanecer especialmente atentos para elevar de manera oportuna las solicitudes que estimen procedentes en orden a defender los intereses que le son confiados, puesto que éstos, como conocedores de las lides y materias jurídicas, son los llamados a actuar con la oportunidad y conocimiento requeridos.

En el *sub studium*, examinado el contenido de la providencia confutada y el *thema dicidendi* fijado por el recurso de impugnación impetrado, a las claras se muestra que, no es la audiencia de resolución de excepciones de mérito, el escenario dispuesto por el legislador para que el promotor de la litis, valiéndose del recurso de apelación, solicite la adición del mandamiento de pago, para así incluir obligaciones o conceptos asimilables sobre los cuales no se ordenó al accionado su satisfacción, bajo el entendido que el propósito de esta audiencia especial se encuentra *encaminado a abrir un debate probatorio y procesal que le permita al juez llegar al convencimiento necesario para aceptar o rechazar las pretensiones de la demanda ejecutiva*,

---

<sup>4</sup> Corte Constitucional, sentencia C-814 de 2009. “Así pues, del estudio contextual de la disposición acusada es fácil concluir que para el momento en que debe presentarse la liquidación del crédito, (i) **ya se ha proferido un mandamiento de pago en el que se ha señalado la suma adeudada**; (ii) ya existe una sentencia en firme que decide en el fondo sobre la existencia de dicha obligación y el momento desde cuando se hizo exigible; y (iii) también está plenamente establecido el monto de la deuda en la unidad monetaria en la que fue contraída dicha obligación. **Así las cosas, las operaciones que restan para liquidar el crédito son la determinación del monto a pagar en moneda nacional, si es el caso, y el cálculo del valor de los intereses, que se establece a partir del tiempo transcurrido desde que la obligación se hizo exigible**, cosa que viene señalada en la sentencia, y la tasa aplicable según los diferentes periodos, asunto que cada seis meses es determinado por la Superintendencia Financiera. **De otro lado, es de suponer que tanto el deudor como el acreedor conocen la historia del crédito sobre el cual versa el proceso, es decir los pagos o abonos que se han hecho, y las modificaciones a las condiciones o términos del mismo que hayan podido producirse, y que en todo caso durante el transcurso del proceso han tenido la oportunidad de precisar esta información.** Así las cosas, prima facie podría concluirse que las bases matemáticas y financieras, con base en las cuales se lleva a cabo la operación de liquidación del crédito dentro del proceso ejecutivo, se han precisado durante el trámite del proceso, de manera que para cuando se realiza dicha operación sólo hace falta calcular los intereses y la conversión a moneda nacional, si fuera el caso. De esta manera, aunque el cálculo de los intereses puede admitir diverso grado de complejidad según la fórmula acordada, en principio ni dicha operación de liquidación resultaría extremadamente compleja, ni menos aún la revisión de la misma, por lo cual los términos de diez y tres días fijados por el legislador para ello podrían ser juzgados como razonables, más si se tiene en cuenta que el principio de celeridad exige evitar dilaciones injustificadas en el progreso del trámite procesal.

<sup>5</sup> Artículo 424 del CGP.

*y a la vez para evaluar las excepciones presentadas por el ejecutado y decidir acogerlas de ser preciso. Y precisamente es a través del análisis del escrito de demanda, del escrito de excepciones, de las pruebas allegadas por las partes y practicadas por el despacho judicial, y de los alegatos de conclusión que el juez adquiere la certeza que se requiere para tomar una decisión que comprenda todos los elementos del debate jurídico<sup>6</sup>.*

En razón a lo anterior, la parte ejecutante debe hacer uso de las herramientas o acciones que el legislador puso a su disposición, *verbi gratia*, como las descritas en los artículos 93, 285, 286 y 287 del CGP, así como lo previsto por el artículo 28 del CPTSS, con miras a garantizar que, conforme a lo señalado en el artículo 431<sup>7</sup> del CGP, la orden de pago comprenda también, las diferencias que en lo sucesivo se causen en el acontecer judicial, propósito que escapa del espectro funcional del recurso de apelación formulado, pues se itera, reformar por inclusión, los parámetros y rubros inmersos en el mandamiento de pago, cuando ya ha sido objeto de contradicción el derecho crediticio consignado en aquella providencia, altera profundamente el equilibrio procesal de las partes, quienes se verían abocadas a controvertir aspectos ya superados en el litigio.

La anterior conclusión se muestra consistente, así también, para desestimar una omisión por parte de la judicatura que justifique en este escenario puntual implementar un correctivo, al considerar que el pretensor, aun desde la presentación de la demanda ejecutiva, NO pretendió el reconocimiento y pago de las diferencias distintas a las que cuantificó en el libelo genitor, al consignar en el *petitum*<sup>8</sup>:

*“Solicito se libre mandamiento ejecutivo o mandamiento de pago contra LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP” y a favor del actor, en la forma que a continuación se determina:*

1.

*- Por PENSIÓN DE JUBILACIÓN CONVENCIONAL entre el 1 de julio de 2007 y el 31 de diciembre de 2007 (7 mesadas) \$4,702,509.*

*- Por PENSIÓN DE JUBILACIÓN CONVENCIONAL entre el 1 de enero de 2008 y el 11 de marzo de 2008 \$1,680,361.*

<sup>6</sup> Corte Constitucional, sentencias T-909 de 2006 y T-656 de 2012.

<sup>7</sup> **Artículo 431. Pago de sumas de dinero.** Si la obligación versa sobre una cantidad líquida de dinero, se ordenará su pago en el término de cinco (5) días, con los intereses desde que se hicieron exigibles hasta la cancelación de la deuda. Cuando se trate de obligaciones pactadas en moneda extranjera, cuyo pago deba realizarse en moneda legal colombiana a la tasa vigente al momento del pago, el juez dictará el mandamiento ejecutivo en la divisa acordada. Cuando se trate de alimentos u otra prestación periódica, la orden de pago comprenderá además de las sumas vencidas, las que en lo sucesivo se causen y dispondrá que estas se paguen dentro de los cinco (5) días siguientes al respectivo vencimiento. Cuando se haya estipulado cláusula aceleratoria, el acreedor deberá precisar en su demanda desde qué fecha hace uso de ella.

<sup>8</sup> Págs.388 a 395, doc.01, carp.01)

- Por REAJUSTE DE LA PENSIÓN entre el 12 de marzo de 2008 y el 31 de diciembre de 2008 (más reajuste mesada adicional) \$2,262,858.

*Por reajuste pensión año 2009 (+ mesada adicional) \$2,978,690.*

*Por reajuste pensión año 2010 (+ mesada adicional) \$3,038,269.*

*Por reajuste pensión año 2011 (+ mesada adicional) \$3,134,586.*

*Por reajuste pensión año 2012 (+ mesada adicional) \$3,251,508.*

*Por reajuste pensión año 2013 (+ mesada adicional) \$3,330,834.*

*Por reajuste pensión año 2014 (+ mesada adicional) \$3,395,457.*

*Por reajuste pensión año 2015 (+ mesada adicional) \$3,519,724.*

*Por reajuste pensión año 2016 (+ mesada adicional) \$3,758,027.*

*Por reajuste pensión año 2017 (+ mesada adicional) \$3,974,100.*

*Por reajuste pensión año 2018 (hasta el 30 de abril) \$1,272,816.*

**TOTAL \$40,299,739**

2. *Por la indexación del retroactivo pensional indicado en el numeral 1°, la cual se liquida desde la causación de cada mesada pensional y hasta la fecha del pago efectivo.*
3. *Por las costas judiciales liquidadas dentro del juicio ordinario laboral por la suma de \$2,358,000.*
4. *Por las costas y agendas en derecho que se causen en el presente juicio ejecutivo conexo”.*

Argumentos estos que resultan suficientes para desestimar, por infundadas, las censuras advertidas en el recurso de alzada, al ceñirse la decisión cuestionada, al estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 446 del CGP, al no encontrar probados ninguno de los hechos sustento de las excepciones propuestas, por lo que se hace imperativo mantener intacta las acreencias de las que es titular el pretensor, restando por resolver su liquidación.

Prosiguiendo con el objeto del presente pronunciamiento, la Sala desestima, *prima facie*, los argumentos expuestos en el recurso de apelación por la apoderada judicial de la encartada, en la medida en que, olvida que la discusión que propone frente a la cuantía del derecho pensional, como causal de imposibilidad de cumplimiento, a la fecha se halla superada, nótese como en auto del 09 de octubre de 2020 (págs.465 a 484, doc.01, carp.01), de forma diáfana se concretó y liquidó el derecho pensional y aun las diferencias resultantes a favor del señor HERNANDO HURTADO QUINTERO, debiendo estarse a lo allí resuelto, a la par que, en tratándose de ejecución de obligaciones contenidas en una decisión judicial, únicamente se

admiten como medios de defensa con miras a enervar la vigencia del mandamiento de pago, las excepciones de **i.** pago; **ii.** compensación; **iii.** confusión; **iv.** novación; **v.** remisión; **vi.** prescripción, o; **vii.** transacción; descartándose así, por impertinente, el embate trazado por la censura.

Finalmente, cumple instar a la juzgadora de primer grado a fin de que, continúe con el condigno trámite procesal y resuelva lo que en derecho corresponda frente a la sucesión procesal que, por motivo del presunto deceso del señor HERNANDO HURTADO QUINTERO, hace referencia la UGPP y aún el profesional del derecho que representa los intereses de la parte ejecutante.

Como corolario de lo expuesto, al no evidenciarse ningún yerro protuberante en la decisión revisada, no surge alternativa distinta para la Sala que confirmar el auto de primer grado censurado, en cuanto ordenó seguir adelante con la ejecución y declaró infundadas las excepciones de mérito propuestas por la UGPP en contra del mandamiento de pago librado a favor del señor HERNANDO HURTADO QUINTERO.

### 3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP, no hay lugar a condena en costas en vista de su no causación, dada las resultas de los recursos de apelación elevados por las partes.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral,**

### 4. RESUELVE


**PRIMERO:** CONFIRMAR el auto dictado el 07 de julio de 2022 por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso EJECUTIVO LABORAL promovido por HERNANDO HURTADO QUINTERO, y en contra de la UGPP, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

**SEGUNDO:** SIN COSTAS en esta instancia.


Lo resuelto se notifica **POR ESTADOS**, según lo previsto en el artículo 41 literal c) del CPTSS.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
Magistrado Ponente



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES  
Magistrado



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE  
Magistrada

**CONSTANCIA SECRETARIAL**

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS  
Secretario